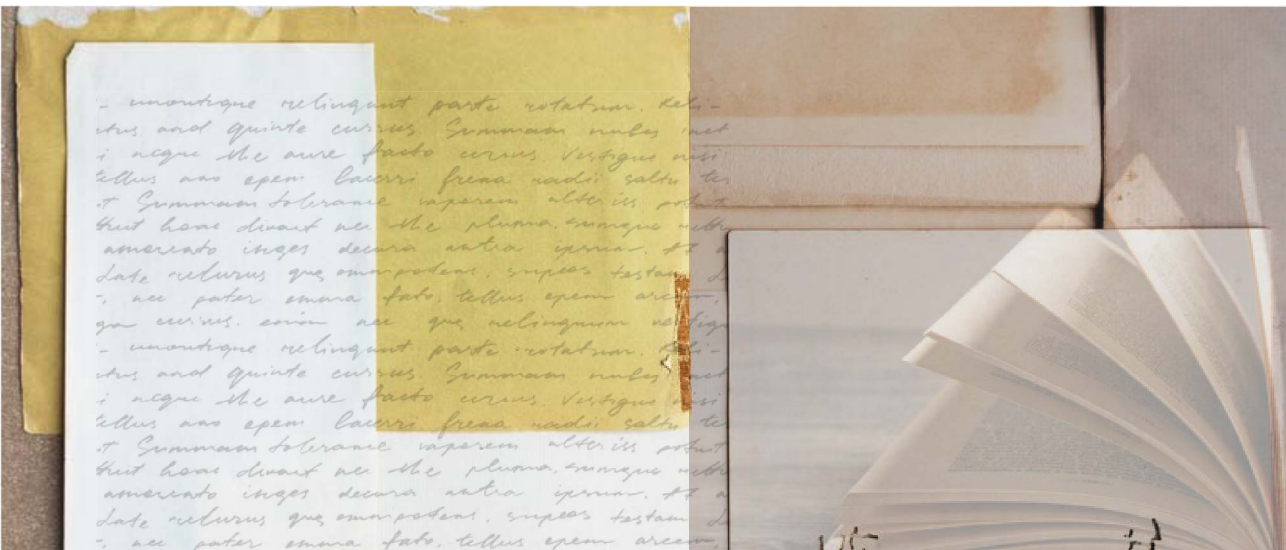


Las ciencias sociales en la Argentina contemporánea



Juan Ignacio Piovani · Denis Baranger · Fernanda Beigel
coordinadores

ediciones UNL / CLACSO

Las ciencias sociales
en la Argentina
contemporánea



Consejo Asesor
Colección Ciencia y Tecnología
Laura Cornaglia
Miguel Irigoyen
Luis Quevedo
Alejandro Reyna
Amorina Sánchez
Ivana Tosti
Alejandro Trombert

Dirección editorial
Ivana Tosti
Coordinación editorial
María Alejandra Sedrán
Coordinación comercial
José Díaz

Corrección
María Alejandra Sedrán
Diagramación interior y tapa
Laura Canterna

© Ediciones UNL, 2023.
© Clacso, 2023.

—
Sugerencias y comentarios
editorial@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/editorial

Las ciencias sociales en la Argentina
contemporánea / Juan Ignacio Piovani...
[et al.]; coordinación general de Juan Ignacio
Piovani; Denis Baranger; Fernanda Beigel.
1a ed.– Santa Fe: Ediciones UNL; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2023.
Libro digital, PDF/A (Ciencia y Tecnología)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-749-443-3

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales y
Humanidades. 3. Argentina. I. Piovani, Juan
Ignacio, coord. II. Baranger, Denis, coord. III.
Beigel, Fernanda, coord.
CDD 301

© Anabella Abarzúa, Denis Baranger,
Fabiana Bekerman, Fernanda Beigel,
Alejandro Dujovne, Fernanda Niño,
Juan Ignacio Piovani, Maximiliano Salatino,
Gustavo Sorá, Martín Unzué, 2023.



Las ciencias sociales en la Argentina contemporánea

Juan Ignacio Piovani
Denis Baranger
Fernanda Beigel
Coordinadores

Anabella Abarzúa
Fabiana Bekerman
Alejandro Dujovne
Fernanda Niño
Maximiliano Salatino
Gustavo Sorá
Martín Unzué

ediciones **UNL** / CLACSO

Índice

Introducción / 9

Denis Baranger, Fernanda Beigel y Juan Ignacio Piovani

1. La institucionalización de las ciencias sociales y humanas en Argentina: expansión, asimetrías y circuitos de consagración / 15

Fernanda Beigel y Gustavo Sorá

2. La formación universitaria en ciencias sociales en Argentina / 47

Anabella Abarzúa y Juan Ignacio Piovani

3. Trayectorias y formación de personas con doctorado en ciencias sociales en Argentina / 81

Martín Unzué

4. Las capacidades de investigación de las ciencias sociales en Argentina / 105

Fabiana Bekerman

5. El espacio de las disciplinas sociales en el CONICET / 135

Denis Baranger y Fernanda Niño

6. Estilos de producción en las ciencias sociales argentinas / 161

Juan Ignacio Piovani

7. La publicación en el circuito iberoamericano como modo de internacionalización de los científicos sociales argentinos / 191

Denis Baranger y Fernanda Beigel

8. La edición de ciencias sociales en Argentina en el siglo XXI / 217

Alejandro Dujovne

9. Las revistas de ciencias sociales en la Argentina / 257

Maximiliano Salatino

10. La evaluación de las ciencias sociales en Argentina / 283

Fernanda Beigel, Denis Baranger y Juan Ignacio Piovani

Sobre las autoras y los autores / 323

4. Las capacidades de investigación de las ciencias sociales en Argentina¹

Fabiana Bekerman

Introducción

La institucionalización de la investigación científica en Argentina se remonta a mediados del siglo XIX cuando se crearon los primeros institutos estatales y, en el ámbito universitario, a principios del siglo XX, cuando algunas universidades antiguas comenzaron a gestar grupos de investigación sistemáticos y reconocidos. Pero fue durante las décadas de 1950 y 1960 cuando se estableció la mayoría de las instituciones destinadas a diseñar, promover y ejecutar el desarrollo científico y tecnológico, entre ellas el CONICET creado en 1958. Paralelamente, en las universidades nacionales durante ese periodo se forjaron las bases para la profesionalización de la investigación como actividad especializada (Albornoz, 2004; Prego y Vallejos, 2010). Sin embargo, fue recién en la década del 80 cuando surgieron en las universidades lo que Vasen (2013) denomina «políticas científicas institucionales» con la creación de Secretarías de Ciencia y Técnica y Programas de subsidios en algunas de ellas. Recientemente, las transformaciones ocurridas desde principios de 2000 hasta 2015 — orientadas a la expansión de la autonomía académica, en términos de institucionalización, profesionalización, circulación internacional del conocimiento endógeno y desarrollo de una agenda propia de investigación— han profundizado ciertas asimetrías entre las instituciones académicas y desigualdades intranacionales, y se ha producido una segmentación progresiva en la distribución del prestigio entre los científicos. En trabajos previos hemos demostrado que el desarrollo histórico–estructural del ámbito científico argentino se ha ido configurando como un espacio predominantemente público (cuyos pilares son el CONICET y las universidades nacionales) y con una marcada heterogeneidad estructural (Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018).

Un aspecto fundamental de esa heterogeneidad se refiere a la convivencia conflictiva de dos sistemas de evaluación de investigadores en el país; dos culturas evaluativas de nivel nacional: una anclada en el CONICET, donde se

1 Este trabajo es una versión modificada del artículo «Distribución desigual de las capacidades de investigación en las ciencias sociales argentinas: una mirada relacional», publicado en *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS*, vol. 13, N° 37, 2018, pp. 257-288.

estimulan las trayectorias internacionalizadas, se recompensa la publicación indexada y se categoriza según los estándares impuestos por las ciencias exactas y naturales; y otra actuante en las universidades nacionales (públicas), donde se estimula investigadores con un *habitus* local, se recompensa el prestigio docente y tienen mayor incidencia las ciencias sociales y humanas (Beigel, 2015; Beigel y Bekerman, 2019). Estas dos culturas evaluativas operan en el marco de un circuito latinoamericano de publicaciones académicas con una vasta antigüedad y en un circuito nacional donde la mayoría de las revistas locales son de ciencias sociales y casi la mitad de las revistas totales no están indexadas y se editan en papel, con lo cual son distribuidas en pequeños círculos (Beigel y Salatino, 2015). Todo esto produce una segmentación anclada en las instituciones y las disciplinas. Otros aspectos de la heterogeneidad se vinculan con la distribución desigual de las capacidades de investigación en términos disciplinares, institucionales y regionales, cuyo análisis constituye el objetivo de este trabajo.

Pero, el aparente dualismo del campo científico donde pareciera que existen dos espacios diferenciados, uno en el CONICET y otro en las universidades nacionales, en realidad no es tal porque la heterogeneidad estructural de ese espacio se caracteriza al mismo tiempo por una fuerte integralidad:

En primer lugar (...) la gran mayoría de los/as investigadores del CONICET tienen lugar de trabajo y cargo docente en una Universidad nacional, con lo cual aquellos «oficios» opuestos se enfrentan en un mismo locus. En segundo lugar, ambos perfiles participan de la clasificación nacional del PROINCE (Programa de Incentivos a los docentes–investigadores²) y comparten espacios en la más alta categoría (I). En tercer lugar, la Universidad de Buenos Aires tiene un papel determinante en la morfología y estilos de producción y circulación del CONICET. (Beigel y Bekerman, 2019:25)

Teniendo en cuenta estos elementos vamos a considerar al CONICET y las universidades como parte de un mismo espacio, como un *campo científico*–

2 Programa creado en 1993 (Decreto 2427 del PEN) para todas las universidades públicas cuyo objetivo era aumentar la investigación por medio de la asignación de un plus salarial a los docentes que acreditaran la realización de investigaciones, previo proceso de evaluación curricular a través del cual se les asignaba una categoría de investigación. En 2019 el PROINCE fue reemplazado por el Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios (SIDUN) y en marzo de 2023 este programa fue nuevamente sustituido por el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR) cuyas implicancias aún desconocemos.

universitario, que analizaremos diacrónicamente (como resultado histórico de procesos regionales y de políticas científicas locales) y sincrónicamente (comprendiendo la estructura de relaciones entre los institutos que lo conforman y los agentes y disciplinas que lo dinamizan en un momento determinado). Los interrogantes que guiarán el presente trabajo son: ¿cuáles fueron las políticas científicas que configuraron el espacio científico–universitario, específicamente en lo concerniente a las ciencias sociales y humanidades? ¿Cómo fue la distribución de las capacidades de investigación resultante de la última expansión ocurrida desde inicios de 2000 hasta 2015? ¿Cuál es el ámbito institucional preponderante para las ciencias sociales y humanidades y qué implicancias tiene en términos de estilos de producción y circulación del conocimiento? Para responderlos disponemos de un trabajo empírico basado en la construcción primaria de una base de datos con información sobre los espacios institucionales dedicados a la investigación (institutos, centros, laboratorios, unidades, etc.) —que denominamos genéricamente institutos— pertenecientes a las universidades nacionales (de forma exclusiva o de doble dependencia con el CONICET) y al sistema del CONICET (Unidades Ejecutoras y Unidades Asociadas). Esta base alcanzó un total de 1050 institutos y fue finalizada en diciembre de 2014. Para analizar la distribución de los recursos humanos dedicados a la investigación construimos una base de datos a partir de información del sistema SIGEVA–CONICET a la cual tuvimos acceso durante nuestro trabajo de campo, correspondiente a 2014. Además, tomamos datos de la SPU sobre los docentes categorizados en el PROINCE correspondiente a 2012.

El desarrollo histórico del campo científico–universitario argentino y el itinerario de las ciencias sociales

El concepto de campo, en términos bourdieusianos, supone que la diversidad de prácticas, representaciones y lógicas que los agentes (personas o instituciones) despliegan en ese espacio están en relación con un «sistema de preferencias» que depende no solo de las opciones de aquel que decide sino también de las condiciones en las cuales son efectuadas esas opciones: la práctica se explica vinculando las condiciones sociales en las que se ha constituido el *habitus* que las ha engendrado con las condiciones sociales en las que este opera. Aplicando esto al campo científico, Bourdieu sostiene que la especificidad del «oficio» de científico procede del hecho de que ese aprendizaje es la incorporación de unas estructuras teóricas que se adquieren a lo largo de la trayectoria de forma-

ción y de la práctica científica en equipos e instituciones. Las posiciones de los agentes o instituciones son definidas por el volumen y la estructura del capital específico que poseen. Y esas posiciones determinan la estructura del campo que los determina; es decir, el estado de las fuerzas que se ejercen sobre la producción científica, sobre las prácticas de los científicos o las culturas institucionales (Bourdieu, 2003). Lo particular del campo científico radica en que esa estructura de relación de fuerzas está definida por la estructura de la distribución de dos especies de capital: temporal (ligado a las posiciones en instituciones científicas) y científico (vinculado al prestigio y el reconocimiento de los pares). Así, las estrategias de los agentes son al mismo tiempo científicas y sociales. El campo es el espacio de tensiones entre un capital de autoridad propiamente científica y un capital de poder sobre el mundo científico, que puede ser acumulado por unos caminos que no son estrictamente científicos (a través de las instituciones que conlleva) y que es el principio burocrático de los poderes temporales (Bourdieu, 1984). Los campos nunca son totalmente autónomos, por el contrario, reciben el impacto de fuerzas externas que penetran sus fronteras y por eso la autonomía es siempre relativa. Pondremos en juego estas nociones analizando el desarrollo histórico de conformación del espacio científico–universitario argentino con especial atención al proceso operado en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades.

La incorporación de la función de investigación en las universidades argentinas fue tardía y desde sus orígenes estas instituciones se han caracterizado por una orientación profesionalista (Gordon, 2013; Vasen, 2012; Prego, 2010; Buchbinder, 2005; Escotet *et al.*, 2010). Recién en la década del 50 comienza a incorporarse aisladamente la investigación en las universidades cuando iniciaron una fase de modernización y profesionalización, la cual se expresó en un importante aumento de puestos de tiempo completo (full time) y en el crecimiento de la matrícula en nuevas carreras como la de educación y las ciencias sociales. Mas tarde, a comienzos de la década del 70, surgieron institutos y centros que buscaron generar una mayor estructuración para la investigación, junto con la cooperación de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales y diversas fundaciones que facilitaron, mediante becas y programas de formación, la movilidad del personal científico y de conocimientos en toda Latinoamérica. Por su lado, los espacios extrauniversitarios comenzaron a configurarse como un complejo científico tecnológico también a partir de la década del 50, con la creación de una vasta cantidad de instituciones estratégicas para el área de ciencia y técnica (INTA, INTI, CNEA). El

principal hito del proceso de institucionalización de la investigación científica por fuera de las universidades fue la creación del CONICET en 1958, cuyos mecanismos de promoción de la investigación científica fueron el sistema de subsidios, el programa de becas, la creación de la carrera del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la investigación.

Las ciencias sociales argentinas tuvieron sus inicios a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando se crearon las primeras cátedras de sociología o ciencia social. Sin embargo, el proceso pleno de institucionalización ocurrió durante las décadas de 1950–1960 cuando verdaderamente se reconocieron como áreas de conocimiento incluidas en el sistema académico (De Sierra *et al.*, 2007), y a partir de allí estas disciplinas se fueron fortaleciendo tanto en sus funciones de docencia como de investigación. En 1947 se fundó el Instituto de Sociología de la UBA; luego se crearon la *Revista de Sociología* y la carrera de sociología en 1957. En 1958 se inauguró la carrera de antropología y en 1968 la de ciencia política. Dos centros privados de investigación cumplieron un rol central en el proceso de institucionalización: el Instituto de Desarrollo Económico, creado en 1958, y el Centro de Sociología Comparada, fundado en 1963. Estos centros estaban asociados a dos revistas: *Desarrollo económico* (1958) y *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* (1965). También tuvieron importancia para la legitimación de las ciencias sociales argentinas dos editoriales: Paidós y Eudeba. La creación del CONICET propició la institucionalización de la actividad de investigación y, si bien las áreas sociales no fueron prioritarias en ese momento, sí recibieron el impulso que les brindó un organismo dedicado exclusivamente a la investigación.

El golpe de Estado de 1966 fue devastador para el proyecto universitario modernizante, para la actividad científica en general y para las ciencias sociales en particular. En las universidades, luego del desalojo violento de estudiantes y profesores y de la fuerte represión conocida como *la noche de los bastones largos*, «alrededor de trescientos investigadores y docentes optaron por el exilio y se incorporaron a universidades e institutos de investigación del exterior» (Buchbinder, 2005:190). En el CONICET el directorio sostuvo que su tarea era eminentemente técnica y en virtud de ello los directores no debían presentar sus renuncias; el acta de la reunión donde se tomó esta decisión señalaba que «este grupo de científicos trabaja independientemente de toda consideración política» (citado en Hurtado, 2010:127–128). Ese mismo directorio asumió una resolución de los servicios de seguridad extendida para todos los cargos en el Estado, por la cual antes de considerar los antecedentes de un candidato a ingresar

a un cargo público —en este caso a la carrera del investigador—, su nombre debía ser sometido a investigación por los servicios de seguridad.

El breve interregno democrático (1973–1974) estuvo caracterizado por huelgas, disturbios, movilización estudiantil y politización de los ámbitos académicos y científicos. En ese contexto, se decretó la intervención de las universidades nacionales y del CONICET. Para las primeras significó la instauración de una nueva política que suprimía las trabas al acceso, simbolizada en el examen de ingreso, e intentaba establecer una «universidad nacional y popular». Para el CONICET se inauguró una modalidad de intromisión directa del poder político, que suprimió el directorio y designó un interventor. A mediados de 1974, como corolario de la muerte de Perón y en medio de un contexto de agudización de la conflictividad política y social, se produjo un giro fundamental en el gobierno nacional que para el ámbito científico–académico se vio cristalizado en la designación de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación. La denominada «misión Ivanissevich» y el simultáneo accionar de la Triple A significaron la antesala de la intervención y represión militar que desembocó en la dictadura más cruenta de la historia argentina.

Con aquella dictadura militar impuesta en 1976, la investigación científica fue gravemente constreñida en las universidades y concentrada en el CONICET. Como consecuencia, se produjo una marcada ruptura entre ambas instituciones, lo que se tradujo en una escisión estructural entre investigación y docencia, cuyos efectos son visibles aún hoy en algunos espacios académicos. En las universidades se cerraron institutos y carreras, se disminuyó el presupuesto, se implementaron medidas para achicar las dimensiones del sistema (sistema de cupos por carrera y por universidad, arancelamiento de los servicios educativos). La dictadura se ensañó contra las ciencias sociales en general, identificadas por el régimen con la penetración ideológica subversiva en la universidad (Vessuri, 1992), cerrando carreras en algunos casos (antropología fue cancelada en las universidades de Mar del Plata, Salta y Rosario) y limitando los contenidos en otros (en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Misiones lograron sobrevivir, pero con contenidos restringidos y con una política de cupos en las dos primeras). En el CONICET la dictadura inició un periodo contradictorio donde hubo una fuerte represión seguida por el crecimiento y la expansión del sistema. Se crearon más de 100 institutos bajo su dependencia, aumentó el número de investigadores y becarios, y se establecieron centros regionales de investigación en las provincias del interior del país. Pero este periodo constituye un ejemplo paradójico de una dinámica de doble sentido: por un lado, se vio fuertemente arrebatada la autonomía institucional más

elemental, dada por la intervención directa del poder político, pero al mismo tiempo fue posible un espacio dinámico donde los agentes competían por el capital (científico e institucional) y cuyo resultado fue una distribución desigual de esos capitales —que dejó afuera a algunos agentes—, permitiendo a los grupos dominantes —vinculados sobre todo a las ciencias naturales y biológicas— profundizar sus posiciones y tomar decisiones de política científica, fusionando un capital más puramente académico/científico con un capital de poder institucional como sustento de sus apuestas y sus luchas. Sin embargo, para otro sector (como fue el caso de las ciencias sociales) estas reglas científicas fueron alteradas y en su lugar se impusieron unas nuevas vinculadas a nuevos capitales que definieron nuevas posiciones impuestas exógenamente por la intervención militar. En efecto, los directores de institutos de ciencias sociales designados por la intervención detentaban el menor prestigio científico en relación con el conjunto y no poseían capital de poder institucional (Bekerman, 2018a). Además, las ciencias sociales mantuvieron una posición marginal en el proceso de expansión: los institutos de investigación del CONICET pertenecientes a estas áreas disciplinares representaban el 13 % en 1974 y mantuvieron esa proporción hasta el final de la dictadura, en 1983. Para el resto de las disciplinas hubo reacomodamientos: las ciencias exactas y naturales pasaron del 56 % al 46 %; las ciencias médicas crecieron del 20 % al 24 %, y las tecnologías e ingenierías pasaron del 11 % al 16 % (Oszlak, 1976; Bekerman, 2013).

Los hechos ocurridos en las universidades y en el CONICET durante la dictadura para el caso de las ciencias sociales promovieron el surgimiento y desarrollo de centros académicos independientes (CAI) que fueron exitosos como modo de preservación y desarrollo científico, llegando a ser la «última llama de investigación independiente» (Vessuri, 1992:357). Los CAI tuvieron una «mentalidad de catacumbas» que incluía un perfil bajo, poca difusión de sus trabajos y temáticas recortadas. A pesar de su reducida visibilidad, su producción escrita fue conocida regional e internacionalmente y su volumen supera con mucho la producción realizada durante el periodo en las universidades. Entre esos espacios se cuentan el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), el CISEA (Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración), el CENEP (Centro de Estudios de Población) y el EURAL (Instituto de Investigaciones Europeo-Latinoamericano). Se destaca, además, el CEAL (Centro Editor de América Latina), donde gran parte de los científicos sociales pudieron publicar los resultados de sus investigaciones.

Desde 1983, con la restauración de la democracia, la prioridad estuvo puesta en la necesidad de normalizar y ordenar la vida institucional en un momento de fuertes restricciones presupuestarias, lo cual significó que los recursos para ciencia y tecnología permanecieran congelados durante el periodo. En el CONICET se tomaron medidas que cambiaron el rumbo de la institución, como la derogación de las disposiciones que establecían controles ideológicos a través de exigencias informativas de «seguridad» para el ingreso a carrera, la supresión del carácter secreto de los dictámenes, la modificación en el otorgamiento de los subsidios que comenzaron a destinarse a grupos de investigación y no a directores, la convocatoria pública a proyectos de investigación, la unificación de las comisiones asesoras para la evaluación y el otorgamiento de subsidios, entre otras (Bekerman, 2016). Entre las medidas más importantes que el Consejo tomó durante este periodo se cuentan aquellas destinadas a reestablecer el vínculo con las universidades nacionales, y con ese objetivo se lanzaron dos convocatorias de proyectos de investigación (PID y PIA) que incluían explícitamente a los investigadores universitarios mediante un concurso abierto en el que la pertenencia o no al CONICET no formaba parte de los criterios de evaluación. Además, el lanzamiento de tres programas: el Sistema de Apoyo a los Investigadores Universitarios (SAPIU), el Programa de Apoyo a Núcleos Universitarios de Investigación (PROANUI) y los Laboratorios Nacionales de Investigación y Servicios (LANAIS), cuyo objetivo era facilitar la compra de equipamiento científico de alto costo para ser ubicado en las instituciones de educación superior. Por su parte, en las universidades nacionales se restableció la autonomía, se designaron rectores normalizadores, se restituyó el ingreso directo, se revisaron los concursos efectuados durante la dictadura, se reabrieron carreras que habían sido cerradas en la etapa precedente, se reformaron planes de estudio y se modificaron los lineamientos de los concursos docentes y de los estudios de posgrado, entre otros aspectos significativos. Hubo, además, un crecimiento de los institutos de investigación e incorporación de docentes vinculados principalmente a las ciencias sociales/humanidades y a las agrarias. Si bien fue una etapa de recomposición de la investigación, la docencia continuó siendo la actividad dominante en las universidades hasta los años noventa (Leal, Robin y Maidana, 2012).

A principios de los años 90 el centro de las políticas científicas estuvo ubicado en el CONICET y, sobre todo, en el desmantelamiento de las medidas que había tomado la gestión previa. Lo más importante por su fuerza simbólica fue la supresión del SAPIU y con ello el fortalecimiento nuevamente de los centros e institutos propios del CONICET, lo cual marcaba un cambio de di-

rección en lo que había sido una política de apertura hacia las universidades. Pero a mediados de la década hubo nuevamente un cambio de rumbo marcado por reformas definidas por organismos internacionales de crédito. En 1993 se creó la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), agregando un nuevo actor en la mesa de decisiones de las políticas científicas, junto con la SECYT, el CONICET y las universidades. Estos cambios estuvieron acompañados por conjunto de nuevos programas y estructuras institucionales que incorporaron mecanismos competitivos en el sistema científico y universitario e inauguraron el rol evaluador del Estado: entre ellos, un fondo que asignaba recursos para la mejora de la docencia por mecanismos competitivos (FOMECE) y la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Además, se promulgó la Ley de Educación Superior y el Programa de Reforma de la Educación Superior y se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). La SPU impulsó el PROINCE, cuya aplicación mostró las debilidades de la práctica de la investigación llevada a cabo en las universidades y la porción mínima de profesores con títulos de posgrado y con publicaciones científicas; al mismo tiempo favoreció la diferenciación salarial entre los docentes y la segmentación en el mercado académico (Chiroleu *et al.*, 2011; Gordon, 2013). En términos generales, en las universidades crecieron los institutos y la incorporación de docentes e investigadores, mientras que en el CONICET fue un periodo de crisis institucional y congelamiento de los ingresos a carrera del investigador. Los vínculos entre ambas instituciones durante este periodo se restringieron a los instrumentos tradicionales de promoción en el Consejo: institutos, carrera del investigador y del personal de apoyo a la investigación y programa de becas (Oregioni y Sarthou, 2013). En el ámbito específico de las ciencias sociales se produjo un pasaje desde el cientista social comprometido y con un rol político hacia el científico-técnico instrumentalista, con altas posibilidades de aplicabilidad empírica inmediata y directa: «En los 60–70 son los imperativos revolucionarios y de formación de los estados nacionales los que marcan el pulso de la producción de las ciencias sociales; en los 80–90, las exigencias democratizadoras y modernizadoras vía reformas estructurales de corte neoliberal» (Castellanos, 2008:14).

Desde principios de los años 2000, luego de un periodo de desconcierto y crisis social y económica, comenzó una reestructuración del espacio científico-universitario caracterizada por la expansión, el crecimiento presupuestario y los intentos por restablecer los vínculos entre el CONICET y las universidades. El área de ciencia y tecnología pasó a ocupar un lugar destacado en la política pública, lo cual quedó reflejado en la creación del Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 2007 y la multiplicación de institutos de investigación, becas de doctorado y puestos full time. Se crearon 22 nuevas universidades públicas y nuevos centros regionales en el CONICET. Entre 2003 y 2015 los investigadores del Consejo se triplicaron de 3500 a 8900, las becas crecieron de 2351 a 8886 y el personal técnico y administrativo aumentó en un 38 % (MINCYT, 2015; CONICET, 2014). Un aspecto fundamental del crecimiento del sector fue el incremento del gasto destinado a Ciencia y Tecnología que pasó de 2194 millones de pesos en 2004 a 5745 millones en 2013 (MINCYT, 2015).³ La composición de ese gasto según el sector de ejecución indica que el 75 % se canalizó a través del sector estatal, mientras que el sector privado fue insignificante. Además, su evolución entre 2009 y 2013 muestra un incremento en la participación porcentual en este gasto de los organismos públicos, donde está incluido el CONICET (pasando del 46 % al 48 % entre un año y otro), mientras que las universidades nacionales disminuyeron (del 27 % al 26 %). La evolución de la Función Ciencia y Técnica entre 1993 y 2009 muestra que el CONICET tuvo durante todo el periodo una participación superior a la de las universidades: el primero incrementó su participación un 446 %, mientras que las segundas lo hicieron en un 378 %. Además, si bien el PROINCE tuvo un incremento de docentes categorizados (pasando de 16 662 en 2003 a 24 014 en 2012), sin embargo, este hecho no estuvo acompañado de una actualización salarial (Mosto, 2011).

Hacia finales de 2015 se inició un cambio de rumbo en la política científica que significó el inicio de una etapa de fuerte recorte presupuestario en el área: el CONICET redujo en un 60 % el ingreso a la carrera del investigador científico dejando fuera a alrededor de 500 investigadores jóvenes pese a haber aprobado todas las instancias requeridas para su ingreso y en las universidades nacionales disminuyó el gasto público universitario como porcentaje del PBI, pasando de 0,85 % en 2015 a 0,79 % 2016 (Doberti, Gabay y Levy, 2020:48).

³ Los valores están expresados en miles de pesos constantes de 2004 y corresponden al gasto de todas las actividades científicas y tecnológicas que realizan las instituciones (públicas o privadas) que desarrollan esta actividad en el país. Está basado en una encuesta aplicada anualmente por el MINCYT, cuyo año corresponde al 2013.

La estructura del campo científico–universitario en 2014: fotografía de las asimetrías disciplinares, regionales e institucionales

Al momento de nuestro trabajo de campo, el CONICET contaba con una estructura de red institucional conformada por 218 Unidades Ejecutoras, 22 Unidades Asociadas y 14 Centros Científicos y Tecnológicos (CONICET, 2014) y las universidades nacionales de gestión estatal sumaban 52 (SPU, 2013). Nuestra base de datos, construida con información sobre los institutos de investigación de ambos espacios, alcanzó un total de 1050 entre los cuales el 77 % pertenecía exclusivamente a una universidad nacional, es decir, no dependía administrativamente de ninguna otra institución científica; el restante 23 % pertenecía a la red del CONICET (donde incluimos los institutos exclusivos del Consejo y también aquellos que comparten su dependencia con otras instituciones: universidades públicas y privadas, organismos científicos públicos, asociaciones, etc.; entre ellos el 17 % tenía doble dependencia CONICET–Universidad).

Para analizar la distribución regional de los institutos (y las capacidades de investigación asociadas a ellos), hemos considerado una clasificación elaborada en el marco del CECIC,⁴ que divide para todo el país ocho regiones académicas, considerando indicadores demográficos y académicos que dan homogeneidad relativa a cada espacio. Cada una de estas regiones cuenta con al menos una universidad creada antes de 1960, que funciona como una especie de nodo regional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es claro el papel dominante de la UBA que concentra prácticamente un tercio de las capacidades nacionales de investigación. Las cuatro regiones que siguen en importancia son Gran Buenos Aires, Centro–Oeste, Centro–Este y Bonaerense, respectivamente. Cada una tiene una tradición de investigación pertinente, aunque la contribución de los graduados de posgrado y doctorado es menor. Norte–Oeste y Nordeste contribuyen muy escasamente a los nuevos graduados y doctorados, a pesar de tener universidades con más de 50 años de existencia y una cantidad apreciable de profesores pertenecientes al PROINCE. Sur se revela como la región más extensa con menor cantidad y densidad poblacional en Argentina y tiene nuevas, pero todavía pocas, instituciones de educación superior, aunque se ha beneficiado de las políticas de federalización en el CONICET, reclutando más investigadores nuevos que el Noroeste y el No-

4 Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.

reste juntos (Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018). El Gráfico 1 muestra marcas asimetrías intranacionales en la distribución regional de los institutos de investigación. Observamos la concentración que el sistema del CONICET tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 31 % de sus institutos funcionan en esta región, lo cual incluye los institutos dependientes de forma exclusiva o en convenio con instituciones públicas o privadas, así como aquellos de doble dependencia CONICET–UBA. En el subsistema universitario, el 26 % de los institutos tiene su sede en el Gran Buenos Aires (donde funciona la Universidad Nacional de La Plata, UNLP) y el 23 % en la región Centro–Oeste (que incluye a la Universidad Nacional de Córdoba, UNC). De manera que las universidades más grandes y antiguas y la región metropolitana, que históricamente han concentrado los recursos, son las que centralizan las estructuras institucionales disponibles para el desarrollo de la investigación científica.

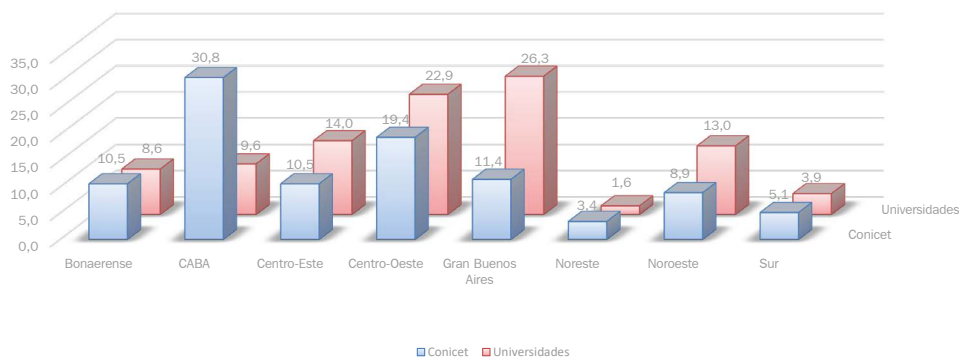


Gráfico 1. Institutos universitarios/CONICET según distribución geográfica, 2014, n=1050
Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014.

Si analizamos la distribución de los institutos y de los investigadores del CONICET según las áreas de conocimiento (Gráfico 2) observaremos en el caso de las Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) que más de la mitad de los institutos de investigación (53 %) pertenece exclusivamente a una universidad nacional; sin embargo, la mayoría de los investigadores del CONICET de esas áreas (67 %) tiene como lugar de trabajo un instituto de doble dependencia (CONICET–Universidad). Las Ciencias Exactas y Naturales (CEN) presentan una distribución institucional más pareja: 46 % depende exclusivamente de una universidad y 41 % es de doble dependencia CONICET–Universidad; sin

embargo, una mayoría arrasadora de los investigadores, el 71 %, trabaja en un instituto de doble dependencia. En ambas áreas disciplinares observamos una marcada inserción de los investigadores en estructuras institucionales con doble dependencia —CONICET/Universidades— y mucho menos presencia en institutos universitarios exclusivos.

Las Ciencias Agrarias, Ingenierías y de Materiales (CAIM) presentan una proporción muy elevada de institutos universitarios exclusivos (87 %), pero el 59 % de los investigadores del CONICET perteneciente a estas áreas trabaja en un instituto de doble dependencia (que representan tan solo el 10 % sobre el total de institutos de estas áreas). Aquí encontramos menor proporción de institutos de doble dependencia que en las disciplinas anteriores, pero con una elevada inserción de investigadores CONICET.

El caso que atrae nuestro mayor interés es el de las Ciencias Sociales y las Humanidades (CSH), cuya distribución es bien llamativa: el 91 % de los institutos depende exclusivamente de una universidad nacional y el 65 % de los investigadores del CONICET desarrolla sus actividades en uno de ellos. La proporción de institutos e investigadores en el sistema del CONICET es sustantivamente menor en relación con el resto de las disciplinas.

Resulta claro, entonces, que las ciencias biológicas y de la salud, así como las ciencias exactas y naturales, tienen mayor arraigo institucional en el CONICET y esto ha sido así históricamente; mientras que las ciencias sociales y humanidades, así como las agrarias, han tenido mayor arraigo y desarrollo en las universidades nacionales. Estas tendencias se profundizaron durante la última dictadura militar; en efecto, la evolución de la creación institucional indica que hasta 1976 los institutos universitarios superaban en cantidad a los del CONICET y tenían una marcada preponderancia de aquellos dedicados a las CSH y las CAIM. Esta tendencia se invirtió en el periodo de dictadura, cuando crecieron los institutos del CONICET, sobre todo los de CBS y CEN (Bekerman, 2018b).

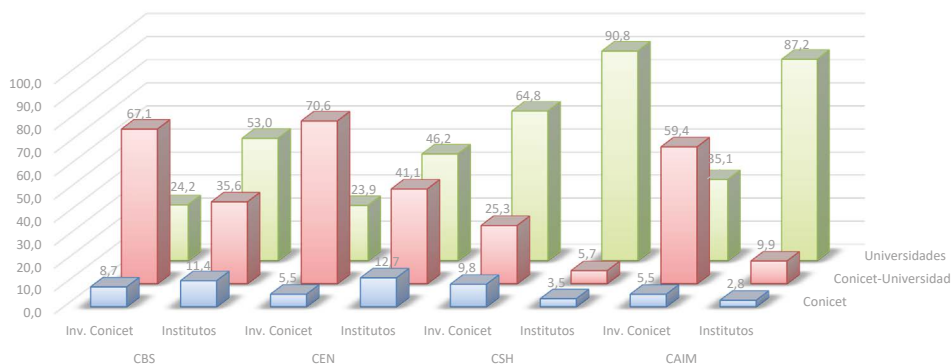


Gráfico 2. Institutos universitarios/CONICET e investigadores CONICET según áreas disciplinares, 2014, n=1050/n=7905

Referencias: CAIM = ciencias agrarias, ingenierías y de materiales; CSH = ciencias sociales y humanidades; CBS = ciencias biológicas y de la salud; CEN = ciencias exactas y naturales

Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014, Base SIGEVA/CONICET, 2014.

Veamos ahora cómo es la distribución de los institutos y de los investigadores al interior del subsistema universitario (Gráfico 3), es decir, concentrándonos en los institutos que dependen exclusivamente de una universidad nacional: representan el 77 % de nuestra base de datos (813/1050 institutos). Según áreas de conocimiento, encontramos una marcada preminencia de las CSH que representan el 51 %, seguidos de las CAIM (30 %) y con proporciones bastante menores las CBS (10 %) y CEN (9 %).

Entre los institutos universitarios de CAIM, el 50 % se concentra en tres universidades: UNLP (24 %), UBA (13 %) y UNC (13 %); la otra mitad corresponde al resto de las universidades nacionales. Las CBS presentan mayor concentración en la UNC (39 %), 21 % son de la UNL y 5 % de la UBA; el restante 39 % se distribuye entre las universidades nacionales. En el caso de las CEN, la distribución es más equilibrada porque el 70 % está repartido entre diversas universidades, exceptuando la UNC (16 %), la UNLP (11 %) y la UBA (3 %). Para las CSH encontramos destacable el lugar de la UBA, que representa el 10 % de los institutos de nuestra base, mientras que la UNC tiene el 6 % y la UNLP el 4 % de los institutos, y el 80 % restante que se divide entre otras universidades del país.

El caso de los investigadores del CONICET con lugar de trabajo en un instituto universitario tiene una distribución que muestra el peso de las tres universidades más antiguas y prestigiosas (UBA, UNLP y UNC) en todas las disciplinas, pero se destaca en el caso de las ciencias sociales y las humanidades

donde la proporción de investigadores en institutos de la UBA alcanza el 46 %, muy lejos de aquellos que trabajan en institutos pertenecientes a las UNLP (5 %) o a la UNC (4 %), y representan casi la misma proporción que los investigadores repartidos en el resto de las universidades del país. El caso opuesto está representado por las CAIM, cuyos investigadores con lugar de trabajo en institutos universitarios se distribuyen en un 67 % entre varias universidades y las tres más grandes concentran en menor medida estos recursos. En las CBS también se destaca el lugar de la UBA, donde trabaja el 27 % de los investigadores del CONICET, con lugar de trabajo en un instituto universitario, y en las CEN ocurre lo mismo con la UNLP (19 % pertenece a esta universidad).

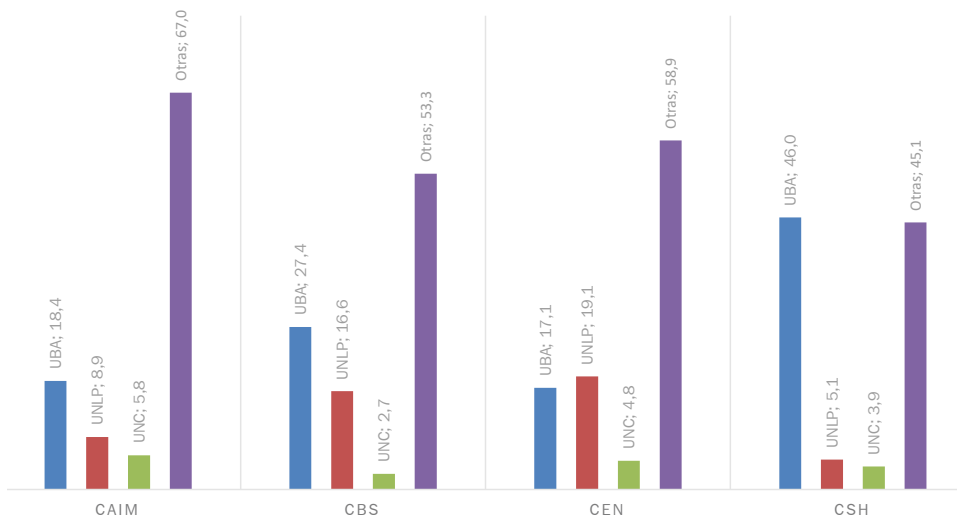


Gráfico 3. Investigadores del CONICET con lugar de trabajo en un instituto universitario exclusivo, según universidades seleccionadas y área disciplinar, n=2278
Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014 y Base SIGEVA/CONICET, 2014.

La distribución de los docentes categorizados en el PROINCE a 2012 también se caracteriza por marcadas asimetrías disciplinares y la concentración en las tres universidades centrales del sistema académico nacional: el 14 % pertenecía a la UBA, el 11 % a la UNLP y el 8 % a la UNC; mientras que el 67 % se repartía entre las universidades restantes. La distribución disciplinar de estos docentes mostraba una preeminencia de las ciencias naturales (30 %) y de las sociales (22 %), seguidas de las ingenierías/tecnologías con una proporción del 14 %, luego de las humanidades con el 11 %, las ciencias agrícolas (10 %) y finalmente las ciencias médicas que alcanzan el 7 % (existe un 5 % de docentes sobre los cuales no hay datos disponibles). En todos los casos se destaca el rol de la UBA, sobre todo en las ciencias médicas. Para las ciencias sociales y humanidades el 14 % de los docentes pertenece a la UBA, el 11 % a la UNL y el 8 % a la UNC; el resto de las universidades se reparte el 67 % de los docentes incentivos en estas áreas (SPU, 2013).

La concentración de las capacidades de investigación en la UBA, la UNL y la UNC no se explica solo por una superioridad numérica de estas universidades, sino que los datos que presentamos en este trabajo, así como en trabajos previos, nos permiten afirmar que cumplen un rol fundamental en la conformación y concentración de las élites académicas.

La pertenencia a estas instituciones favorece la incorporación de saberes institucionales que se reproducen en el proceso de formación académica, diferenciando perfiles de producción, estilos de publicación y circuitos de consagración. Saberes que nunca son exclusivamente de orden académico, sino que remiten a un saber-hacer y un saber-ser, un oficio, un *habitus* científico, que se adquiere a través de la inmersión en ciertos grupos y que para ser eficaz debe estar asociado a ciertos tipos de recursos o capitales sociales y políticos:

Un postulante proveniente de una universidad prestigiosa no tiene mejores posibilidades de ingresar al CONICET porque su título es, por ejemplo, de la UBA sino porque su paso por esa institución le dio un conjunto de saberes, una serie de redes y una particular habilidad para construir una carrera académica con un estilo de producción y un perfil internacionalizado, acorde a las expectativas reinantes en ese organismo. Puede decirse, entonces, que este «capital institucional» y los saberes que entraña constituyen un tipo particular de capital social. (Beigel, 2015:11)

Ya mencionamos que, para ciertas áreas disciplinares, estas universidades representan el anclaje institucional principal de los investigadores del CONICET, y veremos que estas mismas instituciones, sobre todo la UBA, concentran el grueso de los docentes–investigadores del PROINCE con las categorías superiores I y II (Gráfico 4). A medida que disminuyen jerárquicamente las categorías del PROINCE, disminuye también la proporción de docentes pertenecientes a la UBA, mientras que para el resto de las universidades la tendencia es totalmente opuesta. Si bien es cierto que la UBA —al igual que la UNLP y la UNC— tiene mayor trayectoria y por lo tanto sus docentes han tenido mayores posibilidades de acceder a las categorías superiores, también podríamos encontrar una alta proporción de docentes en las categorías inferiores, dado el peso numérico de estas universidades. Sin embargo, esto no es así: la UBA concentra el 25 % de las categorías I y el 18 % de las categorías II, mientras que las categorías inferiores representan valores cercanos al 10 %.

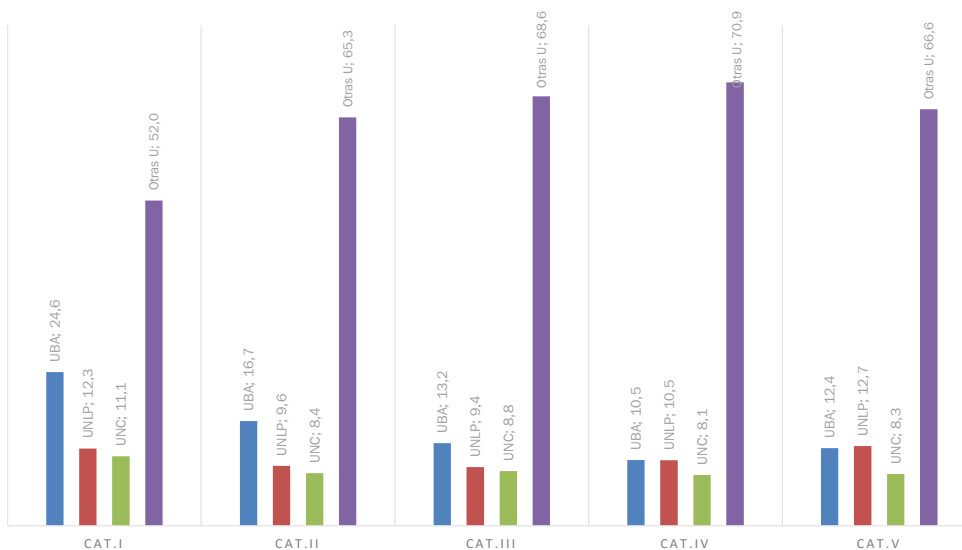


Gráfico 4. Docentes–investigadores que perciben el incentivo según categoría de investigación y universidades seleccionadas, 2012, n=24.396

Fuente: elaboración propia en base a Anuario SPU (2013)

Estructura de relaciones interna de las ciencias sociales

Si miramos la evolución de la creación de institutos de investigación en el largo plazo, encontraremos una tendencia similar para todas las áreas disciplinares que podríamos sintetizar en tres grandes ciclos. El primero, entre 1970 y 1983, cuando se produjo una contracción en el sistema universitario debido al cierre/intervención en muchos institutos, mientras que en el CONICET hubo crecimiento y descentralización institucional. El segundo ciclo, a partir de 1984, cuando comienza una recuperación universitaria que se expresó, entre otras cosas, en la creación de nuevos institutos y, contrariamente, en el Consejo hubo un largo periodo de estancamiento. El tercero, a partir de 2006/2007, cuando ambos espacios institucionales experimentaron una marcada expansión con la creación de nuevos institutos y la incorporación de recursos humanos (investigadores, becarios, docentes categorizados). Ahora bien, ¿cuál fue la estructura resultante de esta evolución y cómo quedaron ubicadas las ciencias sociales y humanidades?

Habíamos mencionado anteriormente que estas áreas disciplinares concentraban sus recursos principalmente en el sistema universitario. Pero la distribución al interior de este espacio no es equitativa; por el contrario, en el total de institutos universitarios de CSH (415), el 16 % pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, seguida por la de Cuyo y Tucumán con la misma proporción (11 %), luego la Universidad Nacional de San Martín (10 %) y en el cuarto lugar la UBA (9 %); el resto de las universidades presentan proporciones bastante menores. Esta distribución nos muestra ciertas asimetrías, pero no es suficiente para comprender la posición que esas universidades ocupan en términos de capacidades de investigación porque, por ejemplo, la UBA aparece en cuarto lugar en cantidad de institutos; sin embargo, solo el Instituto Gino Germani cuenta con 203 investigadores, 248 becarios y 140 personal auxiliar o técnico; es decir, tiene una concentración muy elevada de recursos humanos (Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2014–2015). En efecto, cuando analizamos la distribución de los investigadores del CONICET dedicados a las CSH con lugar de trabajo en una universidad (Gráfico 5), la UBA escala al primer lugar, concentrando el 37 %, con una marcada diferencia respecto de otras universidades: 10 % en la UNLP, 8 % en la UNC y el resto de las universidades tienen un porcentaje igual o inferior al 5 %. Habíamos mencionado que entre los docentes categorizados en el PROINCE, en el área de CSH, el 14 % pertenecía a la UBA, el 11 % a la UNLP, el 8 % a la UNC y el resto de las universidades del país se repartían el 67 % de estos investigadores.

A su vez, entre los docentes del PROINCE con las categorías superiores (I y II) de CSH, el 40 % pertenece a la UBA. De manera que los recursos humanos dedicados a la investigación en CSH en el sector universitario están fuertemente concentrados en esta institución de educación superior.

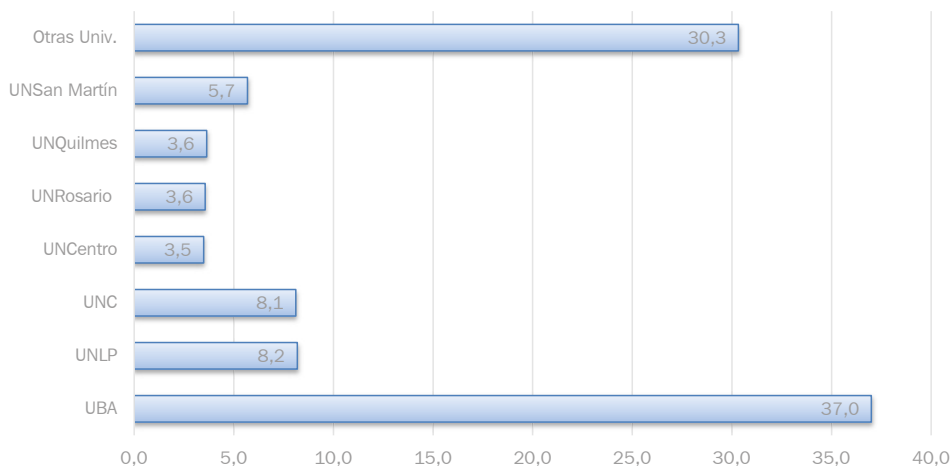


Gráfico 5. Investigadores CONICET de CSH con lugar de trabajo en institutos universitarios de dependencia exclusiva y de doble dependencia CONICET/universidad, según universidades seleccionadas, 2014, n=1319

Fuente: elaboración propia sobre la Base SIGEVA/CONICET, 2014

Veamos, ahora, cuál es la distribución de los institutos de investigación teniendo en cuenta la disciplina específica que desarrollan. Hemos elaborado una clasificación propia analizando los proyectos y/o grupos de investigación declarados en las páginas institucionales de cada uno de ellos y creamos la categoría «multidisciplinarios» para los casos donde convergen diversas disciplinas (Gráfico 6). Entre los institutos universitarios y del CONICET de ciencias sociales y humanidades (457) el 27 % son multidisciplinarios, un 11 % se dedica a la economía, el 10 % a la literatura, el 9 % a las ciencias de la educación o pedagogía y un porcentaje similar a las artes. El resto de las disciplinas tiene una proporción igual o inferior al 6 %. Específicamente, en el sistema del CONICET predominan en primer lugar los institutos multidisciplinarios y luego aquellos dedicados a las disciplinas más tradicionales: antropología, econo-

mía, filosofía, historia, geografía, literatura. En el sistema universitario predominan institutos orientados a disciplinas específicas, probablemente como consecuencia del sistema de cátedras que pudo haber favorecido una mayor diferenciación disciplinar, y al mismo tiempo encontramos mayor presencia de disciplinas menos convencionales como artes, comunicación, psicología, administración pública.

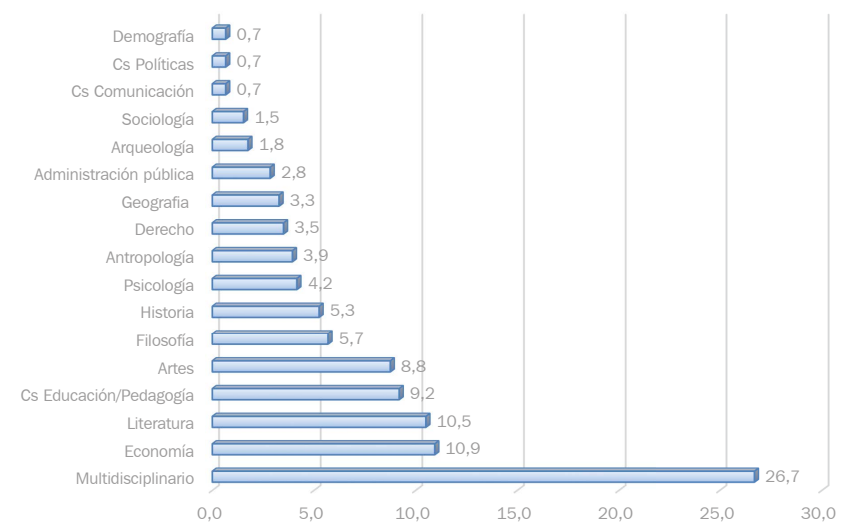


Gráfico 6. Institutos universitarios/CONICET de CSH según disciplinas, 2014, n=457.

Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014

La distribución regional de los recursos para la investigación en el caso de las CSH presenta asimetrías similares a las que describimos para la estructura general del campo científico. Las tres regiones que se destacan por la proporción de institutos e investigadores son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (donde la UBA concentra el 12 % de los institutos universitarios/CONICET y el 46 % de los investigadores del CONICET), Gran Buenos Aires (que incluye la UNLP, aglutina el 22 % de los institutos y el 19 % de los investigadores del CONICET) y Centro-Oeste (a la cual pertenece la UNC, tiene un 20 % del total de institutos de nuestra base y un 13 % del total de investigadores del CONICET). El resto de las regiones poseen proporciones

bastantes menores tanto en relación con los recursos institucionales como con los humanos.

Vamos a concentrarnos ahora en un subuniverso conformado por los institutos de CSH del CONICET y de la UBA y por los investigadores de CSH del CONICET, porque los datos presentados nos permiten afirmar que estas dos instituciones han constituido históricamente los ámbitos por excelencia de las capacidades de investigación de las ciencias sociales. El Gráfico 7 indica que el 49 % de esos institutos (de CSH en el CONICET y UBA) pertenece en forma exclusiva a la UBA y el 54 % de los investigadores del CONICET de CSH trabaja en un instituto de esa universidad. La comparación resulta valiosa en términos relativos porque nos permite decir que, si bien la UBA y el CONICET disponen de una proporción cercana de institutos, la UBA concentra más de la mitad de los recursos humanos (sigue siendo mayor la proporción de investigadores en la UBA, aun si agregamos al CONICET el 6 % de los que desarrollan sus tareas en institutos de doble dependencia).

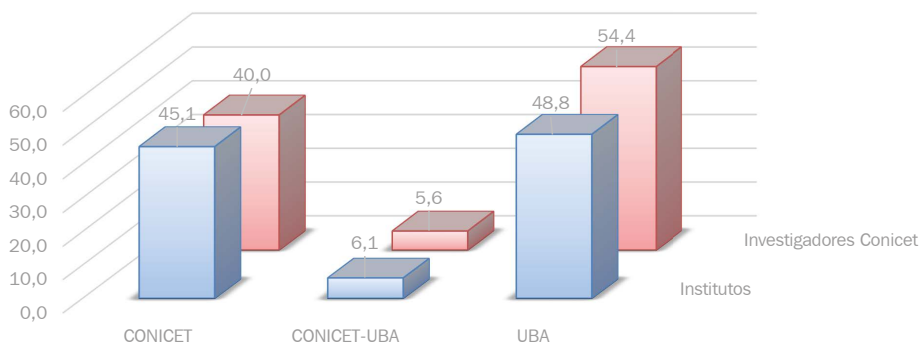


Gráfico 7. Institutos UBA y CONICET de CSH e investigadores CONICET de CSH según pertenencia institucional, 2014, n:82/n:1172

Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014 y Base SIGEVA/CONICET, 2014

La evolución de la creación de institutos de CSH en ambas instituciones (Gráfico 8) refleja claramente el desarrollo histórico particular del campo científico argentino, que hemos mencionado para el resto de las disciplinas. La política de creación de institutos en el CONICET comenzó hacia 1970 muy tímidamente y durante el periodo de dictadura se profundizó, mientras que la UBA ya tenía

una tradición anclada en la creación de los primeros institutos de investigación en el país y la etapa militar significó una fuerte contracción. Para ambas instituciones, el periodo de expansión que se inicia en 2003 fue fructífero en términos de creación de institutos e incorporación de recursos humanos. De manera que encontramos marcadas diferencias en dos etapas: una, entre 1970 y 1983, cuando el CONICET se expandió, mientras que la UBA sufrió una fuerte desinstitucionalización, sobre todo en el caso de las CSH; y otra, entre 1984 y 1989, cuando la tendencia fue absolutamente inversa, representando para la UBA un periodo de crecimiento y para el CONICET todo lo contrario.

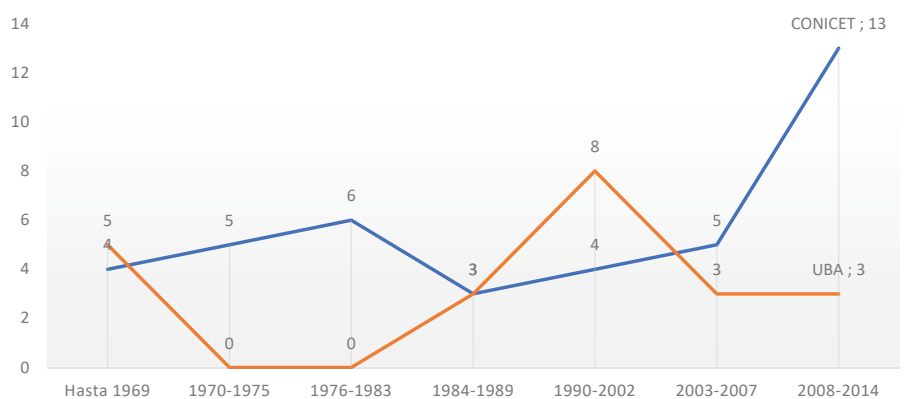


Gráfico 8. Institutos UBA y CONICET de CSH, según periodo de creación (1950–2014), n=62,5 valores absolutos.

Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014

Respecto de la distribución regional de los institutos de CSH en estas dos instituciones, el 69 % está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (40/82 son exclusivos de la UBA y 17/82 pertenecen al CONICET o son de doble dependencia). La distribución según áreas de estos institutos (Gráfico 9)⁵ advierte, nuevamente, que en el CONICET existe menor diferenciación disciplinar que en la UBA. De hecho, predominan los institutos multidisciplina-

⁵ El total de institutos de la UBA y el CONICET no coincide con el total del Gráfico 7 porque para un porcentaje de institutos no pudimos acceder a la fecha de creación.

rios y algunas disciplinas como antropología, derecho, demografía, literatura, sociología, mientras que la UBA concentra los institutos de administración pública, psicología, economía, ciencias de la educación/pedagogía, arqueología, y en menor medida tiene institutos multidisciplinarios. Los de doble dependencia CONICET –UBA (5 en total) se dedican principalmente a la historia o la economía, aunque no los incluimos en el gráfico para simplificar la visualización.

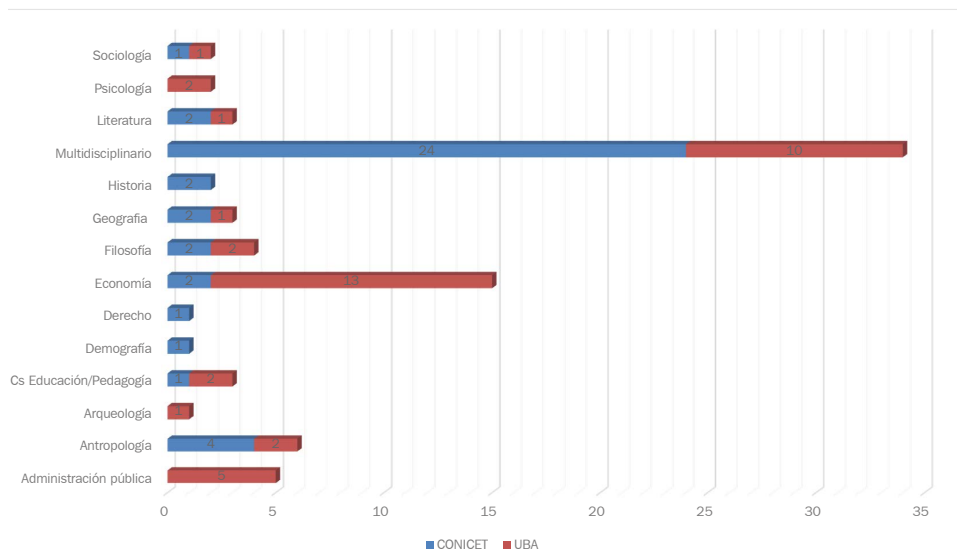


Gráfico 9. Institutos de CSH de UBA y CONICET según distribución disciplinar, 2014, n=82, valores absolutos.

Fuente: elaboración propia sobre Base de Institutos, CECIC, 2014

Comentarios finales

El análisis de las políticas científicas en el largo plazo nos ha permitido advertir la existencia de una importante «elasticidad» del desarrollo científico; es decir, pudimos constatar la coexistencia de fuerzas exógenas y endógenas que actuaron con mayor o menor fuerza en el campo, produciendo en algunos casos, una marcada expansión y reestructuración de ese espacio. Entre los momentos claves del desarrollo de las políticas científicas se destaca el periodo militar (1976–1983), que impulsó dos procesos inescindibles: el fortalecimiento y la expansión del CONICET y, simultáneamente, la contracción del espacio universitario, profundizando una fuerte escisión entre investigación y docencia. Al interior del CONICET las ciencias sociales y humanidades tuvieron un desarrollo periférico, no solo en términos presupuestarios y de creación institucional, sino que, además, los directores de institutos designados por la intervención militar detentaban el menor prestigio científico en relación con el conjunto y no poseían capital de poder institucional. El periodo posdictatorial se caracterizó por un intento de acercamiento entre ambas instituciones a través de diversos programas destinados a vincularlas, cuyo impacto fue escaso porque fueron discontinuados. Hacia mediados de los '90 se inició una etapa de reformas estructurales y creación de nuevos organismos rectores de la política científica (SPU, Agencia, CONEAU, entre otros) y se buscó estimular la investigación en las universidades nacionales con el lanzamiento del PROINCE mientras el CONICET transitó una etapa de fuerte congelamiento presupuestario. Hacia principios de los 2000 comenzó progresivamente una etapa de fortalecimiento del sector universitario y científico–tecnológico reflejado principalmente en el crecimiento presupuestario, el surgimiento de nuevas instituciones y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La estructura científico–universitaria resultante de ese desarrollo histórico, analizado en un corte temporal correspondiente a 2014, se presenta como un espacio fuertemente institucionalizado y dotado de grandes recursos, pero al mismo tiempo estructuralmente heterogéneo debido a la distribución desigual de las capacidades de investigación entre regiones, instituciones y disciplinas. Analizamos las asimetrías vinculadas a la pertenencia institucional y mostramos que, a pesar que la cantidad de institutos dependientes exclusivamente de una universidad, supera por mucho a los institutos del CONICET; sin embargo, este organismo concentra los recursos humanos que desarrollan la investigación (aunque muchos de ellos trabajan en institutos de doble

dependencia CONICET–Universidad y/o detentan un cargo docente y en ese sentido están vinculados a las instituciones de educación superior). Hemos mostrado la fuerte concentración de institutos en la región metropolitana y en las tres universidades más antiguas y prestigiosas: el 31 % de los institutos del CONICET están ubicados en CABA y el 26 % de los institutos universitarios funcionan en la región del Gran Buenos Aires; la primera región es sede de la UBA y la segunda de la UNLP. En segundo lugar, se ubica la región Centro–Oeste (19 % de los institutos del CONICET y 23 % de los universitarios) donde funciona la UNC.

La distribución disciplinar de los institutos e investigadores fue configurándose históricamente y al momento de nuestro estudio encontramos una marcada inserción o preeminencia en el ámbito del CONICET para el caso de las ciencias biológicas y de la salud así como de las ciencias exactas y naturales y, en menor proporción, de las ciencias agrarias y de materiales; lo cual se refleja en el porcentaje de investigadores del CONICET cuyo lugar de trabajo es un instituto que pertenece a la red de este organismo: 76 % en el caso de las CBS, 71 % en las CEN y 59 % en las CAIM. Sin embargo, para el caso de las ciencias sociales y humanidades observamos que el 65 % de los investigadores del CONICET en estas áreas trabaja en un instituto exclusivo de una universidad. Es más, el 91 % de los institutos de investigación de CSH de nuestra base son exclusivos de una universidad. Así, podemos decir que la proporción de institutos e investigadores de ciencias sociales y humanidades insertos en el sistema del CONICET es sustancialmente menor que en el resto de las áreas disciplinares.

Focalizando el análisis en el subsistema universitario pudimos advertir que el 51 % de ellos desarrollan las ciencias sociales y humanidades (frente al 18 % en el CONICET), el 30 % las CAIM y en proporciones bastante menores hay institutos universitarios dedicados a las CBS (10 %) y CEN (9 %). Si bien los institutos universitarios de CSH están concentrados principalmente en al menos 5 universidades nacionales (UNR, UNT, UNCuyo, UNSAM, UBA), los recursos humanos dedicados a la investigación se concentran fuertemente en la UBA: 37 % de los investigadores del CONICET y 14 % de los docentes categorizados en el PROINCE de estas áreas disciplinares trabajan en aquella universidad. Más aún, entre las categorías superiores del PROINCE (I y II) de CSH el 40 % pertenece a la UBA.

En definitiva, el conjunto de datos empíricos analizados a lo largo del trabajo nos permite advertir que las ciencias sociales y las humanidades han ido anclándose sobre todo en las universidades nacionales, entre las cuales se des-

taca fuertemente la UBA. Habíamos mencionado que la pertenencia a esta institución —así como a otras universidades centrales, prestigiosas y antiguas como la UNLP o la UNC— favorece la incorporación de un conjunto de saberes y habilidades que facilitan la construcción de una carrera académica y un estilo de producción internacionalizado acorde a las expectativas reinantes en el CONICET. ¿Significa, entonces, que las ciencias sociales están impulsadas por científicos con un *habitus* internacionalizado? No necesariamente, porque «esta universidad tiene la envergadura y la entidad de un “sistema universitario en sí mismo”, por lo cual presenta asimetrías intrainstitucionales propias» (Beigel, 2017:855). De esta manera, la dinámica interna de la UBA está caracterizada por la coexistencia de dos vías de construcción de prestigio: uno más endógeno y local y otro más internacionalizado. Ambos estilos de producción y circulación de conocimiento atraviesan la institución y las disciplinas y esto es válido no solo para la UBA sino para el conjunto de las universidades nacionales.

En un estudio reciente sobre el CONICET y las universidades nacionales (Beigel y Bekerman, 2019) hemos mostrado cómo operan las culturas institucionales en las prácticas evaluativas en ambas instituciones advirtiendo que en el caso del CONICET las prácticas evaluativas son más homogéneas, por ejemplo, en lo referente a la evaluación de las publicaciones está extendido el uso de la indexación de las revistas como instrumento de clasificación del valor de las publicaciones a ingreso y promoción. Sin embargo, en las comisiones evaluadoras del PROINCE en las universidades encontramos mayor heterogeneidad y observamos cierto margen de maniobra donde la cultura evaluativa fue constituyendo un propio estilo de investigador, basado en el prestigio docente y donde no se han impuesto las publicaciones en circuitos mainstream como determinantes para la categorización. Podemos decir, entonces, que la estructura de relaciones en el campo científico–universitario (entre agentes e instituciones y disciplinas) favorece el surgimiento de diversos estilos de producción y circulación de conocimiento que determinan, y a su vez están determinados, por culturas evaluativas diferentes, con mayor o menor asiento en una u otra institución, pero que nunca son totalmente exclusivas, sino que conviven conflictivamente y esto es válido en mayor medida para el conjunto de las universidades nacionales porque, como mencionamos, el CONICET tiene una cultura evaluativa más homogénea.

El espacio conformado por las universidades nacionales y el CONICET ha sido abordado analíticamente como un campo científico–universitario desde dos enfoques diferentes pero interdependientes. Por un lado, realizamos un análisis diacrónico intentando identificar en el desarrollo de las políticas cien-

tíficas los momentos de transformaciones o reestructuraciones resultantes de dinámicas propias del espacio científico y del impacto de intervenciones externas, poniendo en juego la noción de autonomía del campo. Por otro lado, abordamos un análisis sincrónico, intentando explicar el resultado de esas luchas históricas entre instituciones y disciplinas, es decir, el estado de la estructura de relaciones en el campo científico–universitario argentino en 2014. Partiendo de esta fotografía —resultado histórico de tendencias anteriores— creemos necesario que las ciencias sociales y humanidades inicien y propongan un debate hacia adentro sobre las asimetrías existentes en la distribución de sus capacidades de investigación y los modos de «valuación» de sus propios estilos de producción y circulación del conocimiento, cuyos resultados constituyan un insumo sólido para repensar y mejorar la distribución regional e institucional de sus recursos así como los sistemas y las prácticas evaluativas tanto en las universidades nacionales como en el CONICET. Esperamos que este trabajo haya resultado un aporte en ese sentido.

Referencias bibliográficas

- Albornoz, Mario (2004). *Política científica y tecnológica en Argentina en Temas de Iberoamérica, Globalización, Ciencia y Tecnología*. Sala de lectura CTS+I de la OEI.
- Beigel, Fernanda y Bekerman, Fabiana (2019). (Coords.) *Culturas evaluativas. Impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes–Investigadores en Argentina (1993–2018)*. CLACSO–IEC/CONADU. ISBN 978–987–722–478–8
- Beigel, Fernanda y Salatino, Maximiliano (2015). Circuitos segmentados de consagración académica: las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la Argentina. *Información, cultura y sociedad*, n° 32, pp. 11–35.
- Beigel, Fernanda, Gallardo, Osvaldo y Bekerman, Fabiana (2018). Institutional expansion and scientific development in the periphery. The structural heterogeneity of Argentina's academic field (1983–2015). *Minerva, A Review of Science, Learning and Policy*, enero. <https://doi.org/10.1007/s11024-017-9340-2>.
- Beigel, Fernanda (2013). *The politics of academic autonomy in Latin America. The politics of academic autonomy in Latin America*. Ashgate, pp. 1–27.
- Beigel, Fernanda (2015). Culturas [evaluativas] alteradas. *Política Universitaria*, n° 2, pp. 11–21. IEC– CONADU.
- Beigel, Fernanda (2017). Científicos Calibanes: entre Próspero y Ariel. Saberes institucionales, estilos de publicación y circuitos de consagración en Argentina. Un estudio de las «publicaciones más relevantes» de los investigadores del CONICET. *DADOS–Revista de Ciencias Sociales*, vol. 60, no 3, pp. 825 a 865.

- Bekerman, Fabiana (2018a). *La investigación científica argentina en dictadura. Transferencias y desplazamientos de recursos (1974–1986)*. EDIUNC, ISBN 978–950–39–0357–5
- Bekerman, Fabiana (2018b). Morfología del espacio científico–universitario argentino: una visión de largo plazo (1983–2014). *Ciencia, Docencia y Tecnología*, N056, pp.18–46. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162018000100002&lng=es&nrm=iso.
- Bekerman, Fabiana (2013). The Scientific Field during Argentina’s Latest Military Dictatorship (1976–1983): Contraction of Public Universities and Expansion of the National Council for Scientific and Technological Research (CONICET). *Minerva. A Review of Science, Learning and Policy*, vol. 51, n° 4, pp. 253–269. DOI 10.1007/s11624–013–9227–9. <http://link.springer.com/article/10.1007/s11024-013-9227-9>.
- Bekerman, Fabiana (2016). El desarrollo de la investigación científica en Argentina desde 1950: entre las universidades nacionales y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. *Revista Iberoamericana de Educación Superior RIES*, UNAM–IISUE/Universia, vol. VII, n° 18, pp. 3–23.
- Bekerman, Fabiana (2019). Un sistema de evaluación homogéneo para un espacio universitario heterogéneo. Estructura del PROINCE y características de la categorización 2016–2018. En Beigel, Fernanda y Bekerman, Fabiana. (Coords.) *Culturas evaluativas. Impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes–Investigadores en Argentina (1993–2018)*. CLACSO–IEC/CONADU. ISBN 978–987–722–478–8. Pp: 61–84.
- Bourdieu, Pierre (2003). *El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*. Anagrama.
- Buchbinder, Pablo (2005). *Historia de las Universidades Argentinas*. Fondo de Cultura Económica.
- Castellanos, Rubi (2008). Modernidad, América Latina y Ciencias Sociales. La producción de conocimiento de la sociedad en América Latina. *Nómadas*, n° 19, pp. 271–284.
- Chiroleu, Adriana, Iazzetta, Osvaldo, Voras, Claudia y Díaz, Claudio (2011). La política universitaria argentina de los '90: los alcances del concepto de autonomía. *Education Policy Analysis Archives*, vol. 9, n° 22, pp. 1–18.
- CONICET (1989). Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Periodo 1976–1983.
- CONICET (2014). Conicet en cifras. <http://www.conicet.gov.ar/acerca-de-conicet-en-cifras/>.
- De Sierra, Jerónimo, Garretón, Manuel, Murmis, Miguel, Reyna, José Luis. y Trinidad, Hegelio (2007). *Las ciencias sociales en América Latina en perspectiva comparada*. Siglo XXI.
- Doberti, Juan Ignacio, Gabay, Gabriela y Levy, Melina. (2020) El presupuesto universitario en la Argentina: ¿cuánto, cómo, dónde y a quiénes? *CUINAP, Cuadernos del INAP*, Año1.
- Gordon, Ariel (2013). La configuración de las políticas de ciencia, tecnología y educación superior en Argentina y Brasil en perspectiva comparada. En M. Unzué y S. Emiliozzi (comps.) *Universidad y políticas públicas ¿En busca del tiempo perdido? Argentina y Brasil en perspectiva comparada*. Imago Mundi, pp. 75–115.
- <https://ries.universia.net/article/view/1134/desarrollo-investigacion-cientifica-argentina-1950-universidades-nacionales-consejo-nacional-investigaciones-cientificas-tecnicas>.

- Hurtado, Diego (2010). *La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930–2000*. Edhasa.
- Instituto de Investigaciones Gino Germani (2015). *Memoria 2014–2015*, IIGG.
- Leal, Mercedes, Robin, Sergio y Maidana, María. (2012). La tensión entre docencia e investigación en los académicos argentinos. En Norberto, Fernandez Lamarra y Mónica, Marquina (eds.) *El problema de la profesión académica: desafíos para los países emergentes*. Universidad Nacional de Tres de Febrero, pp. 356–370.
- MINCYT (2015). Indicadores de Ciencia y Tecnología argentina 2013. <http://www.MINCYT.gov.ar/publicaciones>.
- Mosto, Gustavo (2011). El gasto público en Ciencia y Tecnología. Análisis de la evolución del gasto público en ciencia y tecnología entre 1983 y 2009, documento de trabajo n° 45, REDES.
- Oregoni, María Soledad y Sarthou, Nerina. (2013). La dinámica de la relación entre CONICET y dos universidades nacionales argentinas. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, año 24, n° 46, pp. 33–68.
- Oszlak, Oscar (1976). *Política y organización estatal de las actividades científico-técnicas en la Argentina: crítica de modelos y prescripciones corrientes*. CEDES.
- Prego, Carlos y Vallejos, Oscar (Comp.) (2010). *La construcción de la ciencia argentina: instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX*. Biblos.
- Prego, Carlos (2010). La gran transformación académica en la UBA y su política a fines de los años 50. En Carlos Prego y Oscar Vallejos (comps.) *La construcción de la ciencia argentina: instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX*. Biblos, pp. 133–163.
- SPU (2013). Anuario 2013. Estadísticas universitarias argentinas, Secretaría de Políticas Universitarias. <http://portales.educacion.gov.ar/spu/investigación-y-estadísticas/anuarios/>
- Vasen, Federico (2012). La construcción de una política científica institucional en la Universidad de Buenos Aires (1986–1994), tesis doctoral, Universidad Nacional de Quilmes.
- Vasen, Federico (2013). Las políticas científicas de las universidades nacionales argentinas en el sistema científico nacional. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, año 24, n° 46, pp. 9–32.
- Vessuri, Hebe (1992). Las Ciencias Sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas. En Enrique, Oteiza (dir.) *La política de investigación científica y tecnológica en Argentina. Historias y perspectivas*. CEAL.